

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos RIT 196-2024 del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, RUC N°2300501323-2, por sentencia de cuatro de octubre del año en curso, se condenó a Ovicmarlixon Josué Garcés Briceño, a la pena de ocho años y a Luis Alberto Lugo Machado, a la de nuevos años, de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autores del delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 432 en relación a los artículos 436 inciso 1° y 439, todos del Código Penal, perpetrado el 2 de abril de 2023, en la comuna de Lo Prado.

En contra de dicho fallo, el abogado Osvaldo Rosas Martínez, Defensor Penal Público, interpuso recurso de nulidad, en representación de los sentenciados, invocando como causal la contemplada en el artículo 374 letra e), en relación con lo dispuesto en los artículos 342 letras c) y 297 del Código Procesal Penal; y en subsidio, la establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Concedido el recurso y elevados los autos para el conocimiento de esta Corte, el diez de diciembre del año en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de los abogados Matías Romero Mieres, Defensor Penal Público y Diego Guerrero Pérez, Fiscal del Ministerio Público, por el recurso y en contra del mismo respectivamente, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de esta sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Considerando:

Primero: Que la primera causal de nulidad invocada es la prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, en este caso los de la letra c) en relación a lo dispuesto en el artículo 297, ambos del texto legal citado, al no cumplir el tribunal a quo con el deber de ponderación y valoración de toda la prueba rendida.

Señala el recurrente que el fallo impugnado efectúa una equivocada interpretación del principio de congruencia, al no pronunciarse sobre los evidentes cambios que existen en los reconocimientos efectuados por las víctimas respecto de los acusados, aspecto sobre el cual la defensa solicitó poner especial énfasis. Alega que existe un claro reconocimiento inducido que se reitera en diversas partes de la sentencia, al aludir en reiteradas oportunidades a otro caso en etapa de investigación y respecto de cual los encausados gozan de la presunción de inocencia. De este modo se produce una infracción al principio de corroboración, atendida la insuficiencia de material probatorio para acreditar la participación de los sentenciados, y porque, además, la conclusión a la que arriba el *a quo* se construye, sobre la base de afirmaciones que levantan premisas no corroboradas y contradictorias, muchas de las cuales resultan incoherentes entre sí transgrediendo los principios de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Refiere como infracción al principio de la lógica, concretamente al de razón suficiente, el que la conclusión del tribunal no puede considerarse concluyente, ya que se basa en un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

análisis parcial de la prueba, dejando puntos claves sin resolver y generando saltos en el tiempo y la ubicación geográfica que no fueron suficientemente aclarados. Además, el reconocimiento de los imputados por parte de las víctimas fue poco claro y estuvo notoriamente influenciado por la exposición mediática, lo que afecta su fiabilidad y se evidencia debido a que las víctimas refieren detalles que inicialmente no estaban presentes y mantienen confusiones entre los distintos sujetos. Sumado a lo anterior, el resto de la prueba de cargo no posee relación causal con los acusados y por tanto la sentencia infringió el principio de razón suficiente, vinculando una participación que no es clara ni suficiente.

Como infracción también a la lógica, refiere la conculcación del principio de la no contradicción, el que estima vulnerado en la sentencia impugnada al valorar de manera parcial los medios de prueba, omitiendo elementos clave que habrían permitido llegar a una conclusión distinta. Afirma que si se hubieran considerado en su totalidad los antecedentes probatorios allegados al juicio, considerando elementos como la falta de vinculación directa entre el vehículo Chevrolet Sonic y los imputados, así como las dudas en el proceso de reconocimiento fotográfico, influenciado por la exposición mediática del caso, el razonamiento del tribunal habría sido diferente.

Por último y en cuanto a la falta al principio de corroboración, afirma que el razonamiento del tribunal se sustenta en una premisa falsa, al afirmar que no hay duda de que efectivamente los imputados acusados estuvieron presentes el día de los hechos. Sin embargo, esta conclusión no se apoya en pruebas suficientes y omite poner en duda las declaraciones de las víctimas, basándose en suposiciones no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

corroboradas; omitiendo el tribunal cuestionar estos elementos únicamente por provenir de las víctimas, sin evaluarlos con el rigor necesario.

Solicita se declare la nulidad del juicio y de la sentencia, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado, para que este disponga la realización de un nuevo juicio oral.

En subsidio, invoca la causal establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, al aplicar los sentenciadores la regla 1° del artículo 449 del Código Penal, lo que incide en la determinación de la cuantía de las penas impuestas a los encausados, sin una debida fundamentación, lo que determina la desproporcionalidad de las mismas.

Sostiene que la extensión del mal causado es uno de los criterios empleados en la determinación de la cuantía de la pena del artículo 449 del Código Penal, en el cual parte de la doctrina ha entendido que tiene un significado equivalente con el término “mal producido” del artículo 69 del mismo cuerpo legal. Por ello la extensión del mal refiere a la ofensa misma al bien jurídico protegido como las demás consecuencias perjudiciales del hecho que sean un efecto directo del mismo y el mal de alarma que se difunde por su consecuencia o daño mediato.

Alega que no es suficiente el argumento dado por los sentenciadores de que las víctimas hayan sido tres, puesto que los victimarios eran también tres sujetos y por tanto no existe una desproporcionalidad en el uso de la fuerza, al existir paridad en el número de personas involucradas. Además, durante el curso del juicio y la rendición de la prueba no consta que haya existido una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

extensión del daño física y psicológica de tal envergadura que haya trascendido fuera de los hechos discutidos. Por el contrario, las víctimas manifiestan haber sentido inicialmente en la comisión del delito temor producto del arma empleada en la intimidación, pero con posterioridad refieren haber tenido la suficiente tranquilidad para recordar. Tampoco consta que haya mediado una fuerza de tal envergadura y superioridad de manera tal que aquella extensión del mal haya superado los hechos del caso ni tampoco se refiere por ninguna de las víctimas a lo largo de sus declaraciones un daño producto del delito.

Cuestiona también que el tribunal recurrido considerara para aplicar la regla 1° del 449 del Código Penal, el que una de las afectadas por la sustracción de especies sufriera tocaciones por uno de los sujetos, puesto que no existen antecedentes que den cuenta de repercusiones psicológicas e insinuaciones sexuales por parte de su agresor, ni certeza de cual de los imputados fue. En este sentido, afirma que a juicio de la defensa, las tocaciones no tienen connotación sexual ni abusiva para menoscabar a la víctima que pretenda constituir la figura del abuso sexual y los sentenciadores tampoco fundamentan esta idea. Así, la extensión del mal causado debe evidenciarse de manera que no puede ser resuelto con una simple consideración de los presupuestos fácticos que se presentan en el proceso.

Indica que las tocaciones se presentan como elementos propios de la apropiación típica del delito de que se trata, lo que queda demostrado por el artículo 439 del Código Penal que señala: “Para los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”; de manera que no es procedente considerar concurrente la situación de extensión del mal causado.

Señala respecto del imputado Ovicmarlixon Garcés Briceño, que su extracto de filiación y antecedentes, no registra condenas anteriores, sin perjuicio de lo cual el tribunal ha estimado que se le considerará la atenuante de irreprochable conducta anterior. Lo que implica que a su representado lo ampara el principio de inocencia por lo que ha cumplido con un comportamiento ético-social adecuado a sus semejantes y no ha sido previamente condenado penalmente; lo que lleva a imponer la pena para el delito en la parte baja del marco de la pena y, con la aplicación del artículo 449 del Código Penal, resulta la presidio mayor en su grado mínimo *desde el máximo* condenándolo a 8 años y 1 día.

Así las cosas, la determinación de esta pena afecta en el entendido que la imposición de esta supone una medida de ultima *ratio*, que, aunque las circunstancias de atenuante de la responsabilidad para un imputado tienen un grado importante en la determinación de una pena, esta no se ve reflejada en la condena impuesta a mi representado y respecto al merecimiento de la misma.

Solicita que se acoja la causal de nulidad invocada en subsidio de la anterior, y que en tal evento se invalide sólo la sentencia, dictando sin nueva audiencia, pero separadamente, una de reemplazo que condene a los encartados a la pena que corresponda.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Segundo: Que respecto de la causal de nulidad principal invocada, cabe señalar que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: (...) e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”. Por su parte, el artículo 342 del mismo código, en su letra c) prescribe: “La sentencia definitiva contendrá: (...) c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.



Tercero: Que, al respecto, cabe señalar que la causal de nulidad principal, protege la garantía de la sentencia motivada y la razonabilidad de la misma, en la medida que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Sin embargo, controlar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no puede ser entendido como un ejercicio que lleve a valorar nuevamente los hechos. Esto excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. La revisión de la aplicación del sistema conforme al cual la ley manda valorar la prueba rendida en el juicio equivale a comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone la sana crítica, es decir, examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba a la hora de arribar a la decisión contenida en la sentencia. Según ello, la causal de nulidad en comento conlleva analizar la forma en que se ha considerado o apreciado la prueba, pero no el contenido fáctico de esa ponderación.

Cuarto: Que el deber de motivación de la sentencia importa explicitar una justificación específica de la decisión adoptada respecto de los hechos que se han tenido o no por probados, de modo de permitir comprender lo que racionalmente se ha resuelto y facilitar a la vez la revisión jurisdiccional de sus fundamentos.

De este modo y considerando que el sistema procesal chileno reserva al tribunal de la instancia la apreciación de la prueba, para que prospere la causal, debe constarse la ausencia de una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

exposición clara, lógica y completa de los hechos, en términos que impidan entender cuáles fueron los que el tribunal tuvo por acreditados para construir un relato que conduzca, de manera racional y lógica, a la calificación jurídica de los antecedentes fácticos y las circunstancias que sustentan la decisión. En tal sentido, la libre apreciación de la prueba reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Quinto: Que como se ha dicho, nuestro sistema procesal penal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida, el establecimiento del hecho punible y la participación, imponiéndoles la obligación de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, parámetros que se definen como *“las reglas del correcto entendimiento humano”*. En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal radica en la revisión del razonamiento que han seguido los jueces del fondo en el establecimiento de los hechos y de la participación y comprobar que en el citado proceso no se hayan apartado de los parámetros del citado artículo 297 del Código Procesal Penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Sexto: Que el fallo impugnado -en el motivo octavo- concluye que *“con el mérito de las probanzas rendidas en la audiencia, concordantes y congruentes entre sí, tanto respecto de los hechos y sus circunstancias esenciales, como de la participación que en los mismos le correspondió a los acusados Luis Alberto Lugo Machado y Ovicmarlixon Garcés Briceño, por tratarse de testimonios exentos de juicio de reproche, tanto desde un punto de vista objetivo, por cuanto todos los testigos de cargo estuvieron en condiciones de percibir los hechos en la forma que los relataron, así como desde una perspectiva subjetiva, desde que no existen antecedentes para establecer móvil espurio alguno que los hiciera declarar en contra de dichos imputados, por lo que impresionan a estos sentenciadores como creíbles y verosímiles; y, conforme con lo comunicado en la decisión de condena, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se encuentra fehacientemente establecido, más allá de toda duda razonable, el siguiente hecho: El día 2 de abril de 2023, aproximadamente a las 23:30 horas, en la vía pública, en la comuna de Lo Prado, específicamente en una plaza, Luis Alberto Lugo Machado y Ovicmarlixon Garcés Briceño, y un tercer sujeto, premunidos de un arma aparentemente de fuego, abordaron a S.I.P.V, J.I.S.L y C.E.G.S, exhibiéndoles dicho aparente elemento para amenazarlos y exigirles la entrega de las especies que portaban, señalándoles “entreguen todo y no les pasará nada”, procediendo a registrar las vestimentas de dichas personas, sustrayéndoles diversas especies, entre ellas, una bolso con ropa, una billetera y un teléfono celular marca Apple modelo iPhone, para luego los sujetos huir del lugar con las especies en su*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

poder, abordando el vehículo marca Chevrolet, modelo Sonic de color azul.

Al respecto, las secuencias antedichas en todo su desarrollo, han quedado establecidas con el relato de los afectados S.I.P.V, J.I.S.L y C.E.G.S; de los funcionarios de carabineros Nicolás Patricio Segura Durán, quien se apersonó en el sitio del suceso, acogiendo la denuncia de parte de las víctimas; en comunión con lo expuesto por los funcionarios Guillermo Eduardo Barra Serrano, de cuyo relato se desprende que estos hechos están relacionados con el homicidio de Suboficial Mayor Palma; de Paulina Alejandra Godoy Alcaíno quien estuvo cargo del procedimiento llevado por el OS9 y dio cuenta en cuenta en juicio de lo declarado por las víctimas y de la realización de diligencias reconocimientos fotográficos; de José David Aguirre Espinoza e Iván Eusebio Huerta López, quienes tomaron declaración a los afectados; de Víctor Alejandro Polanco Mardones, Juan Carlos Luna Ávila y Daniel Jacob Pino Mellico quienes participaron en la exhibición de set fotográficos a la víctimas; y de Juan Pablo Yáñez Cifuentes y Valeria Andrea Mora Conejeros quienes levantaron las imágenes-respaldo filmicos- del delito que se investigaba; sumado a lo informado por el perito Sergio Matías Pérez Barrientos; más la evidencia gráfica y audiovisual, a la que hacen referencia los otros medios de prueba, exhibida durante el juicio”.

Dichos antecedentes resultaron suficientes para establecer los presupuestos esenciales de la hipótesis fáctica por la que se acusó a los encausados, hechos que como se verá resultan constitutivos del delito de robo con intimidación.

En el motivo undécimo los juzgadores se hacen cargo de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

tesis de la defensa, consistente en que la prueba rendida resultaba insuficiente para establecer la participación de sus defendidos en el ilícito de robo con intimidación, habiendo solicitado en el alegato de apertura se pusiera especial atención en las diligencias de reconocimiento que fueron realizadas a los afectados, descartando vicio alguno en dichas diligencias, pues los funcionarios policiales que las practicaron detallaron claramente la labor realizada, y el resultado obtenido con cada uno de los afectados.

Agregan los sentenciadores en el referido fundamento que de *“la prueba rendida se infiere que existió por parte de las víctimas un reconocimiento espontáneo y certero de quienes cometieron el ilícito que les afectó, a quienes pudieron observar tanto al momento de los hechos, y días después al ver la televisión y redes sociales porque estos sujetos estaban siendo vinculados con el homicidio de un carabinero en servicio. De hecho, fue tal el convencimiento que existió por parte de los afectados, de que las personas que aparecían en la televisión eran los mismos sujetos que cometieron el robo, que fueron en diversas ocasiones a la Comisaría de Lo Prado e incluso en una oportunidad a Estación Central a dar cuenta que tenían la ubicación de estos sujetos, pues aún era entregada por el Iphone del afectado J.I.S.L. Sin perjuicio de lo anterior, como pudo apreciarse durante el desarrollo de la audiencia de juicio, la víctima C.E.G.S., en estrados, igualmente realizó un reconocimiento claro, certero, sin apreciarse ningún tipo de duda o indecisión de que los dos acusados, eran quienes participaron en el robo que la afectó junto a su pareja y amiga”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Luego se refiere a las alegaciones principales que hace la defensa en su clausura. *“En tal sentido, en cuanto a la vinculación con el auto Chevrolet Sonic color azul, de este ilícito, con el que aparecía en las noticias respecto a sujetos vinculadas al crimen de un carabinero, la misma se desprende de la propia prueba de cargo según se explicitó en el considerando octavo.*

En cuanto a que en su primera declaración las víctimas no aportaron características del rostro de los sujetos, lo cierto es que aquello en nada impide que sólo 8 o 9 días después, puedan ampliar la misma – e incluso realizar un reconocimiento fotográfico, como en la especie ocurrió-, considerando que esos días transcurridos pueden haber permitido a los afectados encontrarse en una posición de mayor tranquilidad que aquella que tenían en el momento inmediato en que sufrieron el robo. Es así que incluso J.I.S.L declaró que cuando el OS9 le toma declaración, contó su versión más tranquilo, porque en el momento que fue a dar su primera declaración todavía se encontraba con miedo.

Luego, en cuanto a los cuestionamientos a los reconocimientos fotográficos, aquellos serán desoídos atendido que conforme a lo explicitado en el considerando octavo, no se aprecia de forma alguna, incumplimientos a los protocolos.

Además, en cuanto a una supuesta sugestión, aquello tampoco es efectivo dado que víctimas dieron cuenta detallada de las razones que las llevaron a reconocer a los imputados, y del antecedente del vehículo que participó en estos hechos.

En cuanto a que no se habría consignado que las víctimas consignaron en su primera declaración la letra H de la patente de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

este vehículo Chevrolet que participó en el delito, lo cierto es que se desconoce la razón de por qué aquello no quedó consignado, pero la víctima J.I.S.L , contestando a la defensa, indicó que en su primera declaración en la comisaría, dijo que el auto era un Chevrolet Sonic color azul y que no se acordaba de la placa patente completa, solamente de la inicial H, lo cual además fue uno de los elementos que hizo que este afectado vinculara este hecho con el del homicidio de un carabinero que se mostraba en las noticias y en redes sociales.

Así las cosas, cabe señalar que ni el legislador ni la doctrina han definido que se entiende por la frase “más allá de toda duda razonable” que es el estándar que rige nuestro proceso penal, lo que obviamente no puede ser interpretado como una exigencia extrema, siendo los jueces de fondo quienes deben dar aplicación al mismo.

Conforme a ello, estos sentenciadores entienden que dicho estándar probatorio fue superado con la prueba de cargo presentada en juicio por el Ministerio Público, dado que la prueba de cargo resultó suficiente para dar por acreditado el delito de robo con intimidación y la participación que le cupo a los acusados de este juicio, según se explicitó en los considerandos precedentes.

Así las cosas, por las razones expuestas en este fallo y habiendo valorado la prueba incorporada al juicio, de conformidad lo ordena la ley, permiten a estos sentenciadores arribar a la conclusión de que ha satisfecho la exigencia del artículo 340 del Código Procesal Penal en el sentido de que la decisión condenatoria se adoptó adquiriendo más allá de toda duda



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

razonable, la convicción de que los acusados Luis Alberto Lugo Machado y Ovicmarlixon Garcés Briceño les ha cabido una participación culpable en los hechos acreditados y reseñados en el considerandos precedentes, descartándose por tanto la tesis de absolución”.

Séptimo: Que del análisis del arbitrio en estudio, se advierte que a través de su interposición lo que se pretende por el impugnante es cuestionar y revertir las conclusiones fácticas a las que arriban los sentenciadores, conforme al análisis y valoración que hacen de la prueba rendida, que la defensa no comparte, mas no la inexistencia de *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*, como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal. A lo que debe adicionarse que -como se desprende de los considerandos transcritos en el motivo que antecede y demás pertinentes del fallo impugnado- los sentenciadores del grado explicitaron de manera detallada y precisa los argumentos que les permitieron establecer tanto la existencia del delito investigado, como la participación de los acusados en carácter de autores del mismo, logrando determinar la conducta realizada por éstos.

Octavo: Que, por lo demás, es menester precisar que, del examen de los fundamentos del fallo recurrido, queda claro que el tribunal enuncia y analiza toda la prueba producida en el juicio, para llegar a la conclusión a la que arribó, lo que hace en forma



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

coherente, racional y completa, lo que lleva descartar las conculcaciones a los principios de razón suficiente, no contradicción y de corroboración que han sido denunciados.

De esta manera, consta que los medios de prueba rendidos en el juicio oral fueron no sólo reproducidos sino sopesados al tenor de las alegaciones de los intervinientes y explicitando los juzgadores en sus razonamientos, por qué les asignan mayor valor a determinadas pruebas que a otras, así como las que descartan, por lo que nada parece avalar alguna crítica de relevancia al respecto, haciéndose cargo de las alegaciones de la defensa y dando razones para su desestimación.

Noveno: Que en cuanto a la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, que se invocó en subsidio, cabe consignar que esta se configura *“cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*. Dicha hipótesis resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

En esas condiciones, en el caso que el recurso de nulidad se funde en esta causal genérica podrá invalidarse sólo la sentencia y ello ocurrirá únicamente si la invocada no se refiere a formalidades del juicio, ni a los hechos o circunstancias que se hubieren dado por probados, sino que se debiere, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 385 del Código Procesal Penal, a que el fallo califique de delito un hecho que la ley no considere tal; que se aplique una pena y no procediere aplicar sanción alguna o que se imponga una pena superior a la que legalmente corresponda.

Décimo: Que la causal en estudio se funda en que el tribunal oral hizo una errada aplicación del derecho al determinar el *quatum* de la pena que le impone a los condenados como autores del delito de robo con intimidación, al aplicar la regla 1° del artículo 449 del Código Penal.

Al respecto, el tribunal concluyó que ambos acusados resultaron condenados en calidad de autores de un delito consumado de robo con violencia, sancionado de acuerdo con lo prescrito en el artículo 436 inciso 1°, en relación con lo dispuesto en el artículo 449, ambos del Código Penal, con la pena corporal de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo.

En tales circunstancias, en lo que concierne expresa el fallo que Ovicmarlixon Garcés Briceño, para determinar la pena en concreto, debe considerarse que éste resultó beneficiado con una circunstancia atenuante, y no lo perjudican agravantes, por lo que se impone la pena para el delito en la parte baja del marco penal, resultando la de presidio mayor en su grado mínimo. Luego, tomando en cuenta la extensión del mal causado en el que no sólo debe considerarse respecto de una persona, sino de tres



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

víctimas, donde una de ellas, además de ser afectada por la sustracción de especies sufrió tocaciones por uno de los sujetos, se impone la pena de acuerdo a la Regla 1ª. del artículo 449 del citado código, en el quantum de ocho años.

En cuanto a Luis Alberto Lugo Machado, para establecer la sanción en concreto, se concluye que no existen circunstancias modificatorias que considerar. No obstante lo anterior, al igual que respecto del otro acusado, se impone la pena para el delito en la parte baja del marco penal, resultando la de presidio mayor en su grado mínimo; considerando la extensión del mal causado, por las mismas circunstancias referidas, esto es, tratarse de tres víctimas y haber sufrido una de ellas tocaciones por uno de los sujetos, imponiendo la pena de acuerdo a la Regla 1ª. del artículo 449 del citado código, en el quantum de nueve años.

Undécimo: Que en cuanto a lo preceptuado en el artículo 449 del Código Penal, cabe recordar que la Ley N° 20.931, de 5 de julio de 2016, modificó las reglas de determinación de las penas para ciertos delitos, las que resultan plenamente aplicables al robo con intimidación. En este contexto, el nuevo sistema autoriza a los juzgadores fijar el quantum de la sanción dentro del marco legal fijado por el legislador, sin compensar las atenuantes y agravantes que puedan favorecer o perjudicar al acusado. El inciso primero del precepto dispone: “Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

continuación se señalan: ...”. El N° 1 establece una regla general: “dentro del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal acusado”, es decir, el tribunal tiene la facultad de determinar cuál es la pena exacta a aplicar, proceso valorativo entregado a la apreciación del juzgador conforme a las pautas entregados en la norma.

En este sentido, cabe consignar que los sentenciadores conforme a los hechos asentados, consideraron ciertas circunstancias que tuvieron lugar con motivo de la conducta ilícita sancionada, como el haberse afectado a tres personas y efectuado tocaciones a una de ellas, para efectos de determinar la extensión del mal causado, presupuestos fácticos que no pueden desconocerse en esta sede y que permiten justificar el concepto antes señalado, tal como lo hacen los juzgadores, pues dan cuenta de la extensión de los efectos dañosos del tipo penal sancionado.

Lo anterior, descarta el fundamento de error de derecho propio del motivo de nulidad esgrimido y en todo caso, la influencia que tendría en lo dispositivo del fallo, al haber actuado los sentenciadores dentro del marco que les confiere la ley para regular *el quantum* de las penas impuestas.

Duodécimo: Que conforme a lo señalado el recurso de nulidad será desestimado, al no configurarse la causal –principal y subsidiaria- invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 373, 374 y 384 del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública, en representación de Ovicmarlixon Garcés Briceño y Luis Alberto Lugo Machado, en contra de la sentencia de doce de junio del año en curso dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en causa, RIT 196-2024, RUC: 2300501323-2, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma La Sra. Vásquez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar ausente.

N°Penal-6371-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Carolina S. Brengi Z., Veronica Cecilia Sabaj E. Santiago, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXXYXREYXZU